

## NOTA DE PRENSA

### La clave del desafío: educación ambiental, ordenación del territorio, cumplimiento de la normativa y más recursos para la gestión forestal



El coloquio organizado por Diálogo reunió a expertos de organizaciones ambientales, representantes del sector privado y responsables públicos para analizar, desde distintas perspectivas, un fenómeno que ya se ha convertido en uno de los grandes retos del país.

A partir de las intervenciones de Mónica Parrilla (Greenpeace), Irene Ogea (ENGIE España), José Almodóvar (Gobierno de Castilla-La Mancha) y Antonio Barbero (Protección Civil), el encuentro permitió trazar un diagnóstico claro: los incendios, que este año han dejado algunos de los peores episodios registrados, evidencian la necesidad de reforzar la educación ambiental, mejorar la gestión forestal y avanzar hacia una gobernanza más coordinada y eficaz.

**Mónica Parrilla de Diego**, coordinadora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, abrió la sesión situando el contexto: la región mediterránea es “el segundo punto crítico de biodiversidad” donde más se manifiestan los efectos del cambio

## NOTA DE PRENSA

climático. Recordó además que ocho de los diez peores incendios de este siglo se han registrado en 2025, con una superficie afectada tres o cuatro veces mayor que en años anteriores.

Parrilla explicó que, según la memoria de la Fiscalía (2019–2023), el 69% de los incendios fueron intencionados y el 24% debidos a negligencias. Preciso que “intencionado” no equivale necesariamente a delito y que bulos habituales, como la piromanía generalizada, no se corresponden con la realidad. Subrayó también que, ante una topografía y una meteorología imposibles de modificar, la única vía de actuación pasa por gestionar la masa forestal: “necesitamos invertir de forma decidida y hacer cumplir la normativa existente”. Una gestión que, según advirtió, se complica por el abandono rural y la falta de recursos en municipios obligados a elaborar ellos mismos sus planes preventivos de emergencia.

En este sentido, defendió impulsar el consumo de productos locales y reorganizar la contratación pública de alimentos para favorecer la producción de proximidad sostenible, clave para mantener un “paisaje mosaico” que frena la propagación del fuego. También alertó de que la gestión del post-incendio sigue siendo “una asignatura pendiente”, especialmente ante episodios de lluvias que aceleran la erosión y contaminan las aguas.

**José Almodóvar Aráez**, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, señaló que su comunidad “es la tercera de España en cuanto a gestión forestal, con 3,8 millones de hectáreas a las que hacer frente”, y celebró que este año, por fin, “los incendios hayan saltado a la opinión pública”, algo que “no había pasado nunca”. En su opinión, la solución pasa por la gestión forestal, especialmente en un contexto donde “la superficie forestal va en aumento, con un 20% más de bosque, y el existente es cada vez más denso”.

Subrayó que la Ley de Montes es clara y “establece que la responsabilidad es del dueño”, por lo que se requiere colaboración privada para afrontar este desafío, ya que “el 70% de los montes son privados”. No obstante, puntualizó que la realidad de la propiedad forestal es compleja y, en algunos casos, se pierde la trazabilidad de la propiedad, lo que complica la gestión. Explicó que desde su comunidad tratan de “generar un mercado para poner en valor los servicios ecosistémicos que da el monte”, aunque necesitan que las grandes compañías colaboren e inviertan también en el ecosistema forestal.

Puntualizó además que “hay mucho margen de mejora en educación ambiental” y que quizás no se esté abordando con el pragmatismo necesario para desmitificar el papel de la desbrozadora, esencial para mantener la salud del bosque.

## NOTA DE PRENSA

**Irene Ogea**, Head of ESG de ENGIE España, expuso los datos de percepción ciudadana que obtienen de manera periódica gracias a la iniciativa del “Observatorio ENGIE en España: Ciudadanos, Cambio Climático y Transición Energética”, fruto del compromiso de la compañía con la acción climática. En el último informe se revela que “un 88% de los encuestados considera que los incendios se han incrementado significativamente en el último año”, lo que confirma que se trata de una preocupación real en la ciudadanía.

En línea con estos resultados, Ogea señalaba que los encuestados atribuyen el aumento de los incendios, en primer lugar, a la falta de mantenimiento de las masas forestales; en segundo, a negligencias humanas; en tercero, a la escasez de recursos y prevención por parte de las administraciones locales; y, finalmente, al cambio climático. Añadía además que “demandan una respuesta colectiva que pase por la gestión activa del territorio, una mayor asignación de recursos por parte de las administraciones y seguir impulsando la transición energética para reducir las emisiones”.

Explicó también cómo en ENGIE deben adaptarse a los futuros escenarios climáticos construyendo planes de adaptación para proteger a sus empleados, asegurar sus instalaciones y considerar el impacto económico sobre sus operaciones, mencionando además la dispersión normativa autonómica que afronta la compañía al operar a nivel nacional.

Subrayó que “para que una empresa haga algo y tenga impacto hay que meterlo en el negocio”, poniendo como ejemplo la línea de suministro de biomasa forestal sostenible y certificada en un radio de 50 km, en la que emplean residuo forestal como combustible para calderas de biomasa: “una tonelada que retiramos del territorio es una menos susceptible de arder”. Esta iniciativa planificada y recurrente aprovecha además terrenos forestales privados, incrementando su rentabilidad. Desde ENGIE se ha materializado en un modelo pionero de descarbonización urbana en Txantrea (Navarra) con la primera red de calor con biomasa forestal de la comunidad, fruto de una colaboración ejemplar entre el sector público y el privado.

**Antonio Barbero Hernández**, representante de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, subrayó que, para que la prevención sea eficaz, “todos debemos sentirnos parte del riesgo y parte de la solución”, reivindicando la importancia de la corresponsabilidad entre administraciones: desde “buenos planes de protección en los ayuntamientos”, pasando por “una adecuada ordenación del territorio desde las comunidades autónomas como primeras unidades competentes”, hasta la intervención de la Dirección General no solo cuando la emergencia es de ámbito

## NOTA DE PRENSA

nacional, sino desde el nivel 2 mediante recursos estatales que apoyan a las autonomías.

“La responsabilidad de que el ciudadano esté concienciado es de las administraciones, y en esa línea tenemos que sacar planes y herramientas para que los ciudadanos se sientan parte de este riesgo y parte de la solución”. Señaló que está previsto aprobar próximamente un programa conjunto con los ministerios de Educación e Interior por el que se impartirán “dos horas de formación obligatoria en primaria y cuatro en secundaria sobre protección civil”, a escala nacional.

Destacó también la “implicación de empresas públicas y privadas”, esenciales en las cinco fases de una emergencia: prevención, preparación y planificación, respuesta, recuperación y lecciones aprendidas —siendo esta última una de las áreas donde más puede incidir Protección Civil—.

En materia de coordinación, explicó que es el Consejo Nacional de Protección Civil, en el que están representados ministerios y comunidades autónomas, quien coordina los planes de emergencia y está elaborando unas directrices básicas para evitar la dispersión normativa y ofrecer un marco común para entidades locales y autonómicas.

En la apertura del acto, **Julio Veloso Caro**, socio de Broseta Abogados —despacho que cumple 50 años—, dio la bienvenida a los asistentes e introdujo la temática recordando que “conviene no olvidar que la inmensa mayoría de los incendios tienen causa humana y que no solo afectan a los bosques, sino también a las ciudades, con el consiguiente impacto que ello supone”.